

Medellín, 27 de octubre de 2021

Doctor

CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

Magistrado Ponente Sala Cuarta de Decisión Laboral

Tribunal Superior de Medellín

Referencia: Acción de tutela

Accionante: Hever León Jaramillo Orozco

Accionada: Sala Administrativa del Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia – Juzgado Once Laboral del
Circuito de Medellín.

Asunto: Impugnación contra la sentencia de primera instancia.

HEVER LEÓN JARAMILLO OROZCO, en mi calidad de ciudadano accionante, respetuosamente me permito interponer recurso de impugnación contra la sentencia de primera instancia, emitida el 26 de octubre de 2021, mediante la cual se declaró improcedente el amparo a mis derechos fundamentales a la salud, en conexidad con el mínimo vital, a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada por parte de la SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ANTIOQUIA Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ANTIOQUIA. Trámite al que se vinculó al JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN.

RAZONES DE MI DISENSO CONTRA LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Con todo respeto, considero que la decisión adoptada por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, en mi caso concreto, solo se enfocó en hacer prevalecer el derecho a la carrera judicial -lista de elegibles, frente al derecho a la estabilidad laboral reforzada por razones de discapacidad (Ley 361 de 1997, artículo 26, Sentencia de sentencia de la Corte Constitucional C-531-2000).

También introdujo un condicionamiento exótico a la hora de fijar una postura frente a la protección de mis derechos fundamentales, consistente en que el juez nominador aún no ha nombrado de la lista de elegibles que le proporcionó la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia; como si la petición de amparo constitucional que requiero de manera urgente, se hubiera presentado antes de tiempo y, de paso, dejó tan delicada decisión constitucional en cabeza del juez unipersonal-nominador.

Lo más paradójico es que la decisión que declaró improcedente la protección de mis derechos fundamentales ignoró hacer mención de mi situación de salud en concreto, es decir, del motivo central que me llevó a implorar la protección ante el juez constitucional. Por tanto, me permito recordar a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la prueba de mi estado de discapacidad previamente conocido por la entidad accionada:

Estoy incapacitado para laborar desde el día 10 de enero de 2021, fecha en la cual sufrí un coma diabético, seguido de un derrame pleural en el pulmón derecho efecto POS COVID19 sufrido en el mes de septiembre de 2020, tal y como se encuentra acreditado en el Área de Recursos Humanos de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Antioquia. Todo esto con múltiples complicaciones por enfermedades de base (DIABETES MELLITUS, SINDROME NEFRÓTICO e HIPERTENSIÓN) y que a la fecha me siguen generando incapacidad continua, ya que dentro de las múltiples complicaciones y secuelas actuales que se suman a las enfermedades de base que tengo y que continúa en estudio están: un dolor permanente en la columna dorsal, trastorno del sueño y otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia (pérdida de memoria, pérdida de fuerza en miembros inferiores con compromiso de la coordinación), que repito, se encuentran en estudio por parte de los especialistas correspondientes de la EPS. Es de anotar que debido a que los estudios no han sido oportunos, pues la agenda de la EPS es muy lenta no ha sido posible tener un diagnóstico concluyente.

Dentro de los procedimientos y exámenes médicos pendientes y relevantes tengo los siguientes:

- **Consulta psiquiatría a la espera de agenda.**
- **Biopsia renal para el 28 de octubre de 2021.**
- **Consulta nefrología mes de diciembre de 2021.**
- **Polisomnografía octubre 19 de octubre de 2021**
- **Consulta neurología 22 de octubre.**
- **Pendiente de agenda para cita con fisiatra**

Tal y como lo enuncié en el escrito de la tutela, dentro de los procedimientos pendientes tenía la cita que tuve el día 22 de octubre de 2021 con el área de neurología para la revisión y lectura de exámenes, entre estos, el resultado de la evaluación neuropsicológica, que detalla un trastorno neurocognitivo leve, y trastorno de ansiedad y depresión. Como consecuencia, la neuróloga me remite a evaluación con psiquiatría, diligencia el concepto médico de rehabilitación el cual es del siguiente tenor: “...***Pronóstico a corto y mediano plazo, de acuerdo a la posibilidad de rehabilitación y mejoría médica posible DESFAVORABLE***”. y solicita valoración por médico laboral. Adicional a ello, como se puede observar en la historia médica y certificado de incapacidad del día 22 de octubre, que adjunté como prueba en el complemento de la tutela, me incapacitaron por 4 meses más (prorrogables de 30 en 30 días por medicina general) a partir del día 23 de octubre de 2021 y hasta la próxima cita de revisión con el neurólogo, que, según la misma historia, es para dentro de cuatro meses.

Todas las incapacidades laborales las he tramitado por el conducto legal regular; incluso cuando cumplí los 180 días de incapacidad la dependencia de Recursos Humanos-Tesorería de la Administración Judicial, emitió el acto administrativo correspondiente para que su pago se siguiera efectuando por el Fondo de Pensiones.

Estimo que mi historia clínica no fue objeto del más mínima valoración, en el contexto de las consideraciones del fallo objeto de impugnación.

Consecuente con los argumentos expuestos, considero respetuosamente que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia puede tener una óptica más coherente al momento de dirimir la supuesta pugna o tensión entre derechos fundamentales y, por qué no, se incline, como debe ser, desde el punto racional y proporcional, por hacer prevalecer el axioma de la estabilidad laboral reforzada por razones de salud en conexidad con la seguridad social y el mínimo vital, al menos mientras se culmina el proceso tendiente a diagnosticar definitivamente mi estado de salud, y de contera la calificación de la pérdida de capacidad laboral.

PETICIÓN

Solicito respetuosamente a la **H. Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia**, que revoque la decisión de primera instancia y, en su lugar me brinde la protección mis derechos fundamentales al mínimo vital en conexidad con la seguridad social integral, y la estabilidad laboral reforzada, **hasta tanto se obtenga un diagnóstico definitivo de mis patologías físicas y sensoriales, y se tramite el proceso de calificación de la pérdida definitiva de capacidad laboral.**

Atentamente,



HEVER LEÓN JARAMILLO OROZCO

CC 98.505.941

Citador Juzgado Once Laboral Del Circuito de Medellín

